



SALUD

CONSEJO DE LA SECRETARÍA DE SALUD



2019

AÑO DEL CAUDILLO DE GUERRA
EMILIANO ZAPATA

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL

Dirección Contenciosa

558

346

MAR 5

Lic. Rocio

1192

Arturo Domínguez Saldaña

Juicio de Amparo: [REDACTED]
Quejoso: DESART MX, S.A. DE C.V.
Asunto: Se rinde por informe justificado.

MAR -7 PM 10:53

DE LA PRIMERA REGION
CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE MEXICO

Cuaderno Principal.
Ciudad de México, a 4 de marzo de 2019

**C. Juez Segundo de Distrito del Centro
Auxiliar de la Primera Región con residencia
en la Ciudad de México.
Presente.**

Ana Lucía Tlahuech Rivera, Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación de la autoridad señalada como responsable C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 11 Bis, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004 y su última reforma publicada en dicho medio informativo oficial el 07 de febrero de 2018, en relación con el artículo Segundo y Tercero Transitorio de dicha reforma; y de conformidad con las atribuciones conferidas en el Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, consultable en la página oficial <http://comeri.salud.gob.mx/descargas/Vigente/2017/MOE-CGAJDH-2017.pdf>, por lo que adquiere la categoría de hecho notorio de conformidad con la Jurisprudencia XX.2o. J/24¹, y en términos del oficio de representación presidencial número 5.AP/ARP/732/2019, de fecha 17 de enero de 2019, emitido por el C. Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con fundamento en los artículos Segundo y Cuarto, ambos del "ACUERDO General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic.), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de febrero de 2014, recibido el día 18 de enero de 2019, en la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud; ante usted, con el debido respeto comparezco para exponer:

En atención al oficio número 1917/2019, que contiene inserto el proveído de fecha 13 de febrero de 2019, con el que se admite la ampliación de demanda de amparo y requiere a autoridad que represento para que rinda su informe de ley; de conformidad a lo dispuesto en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, **rindo el informe justificado** solicitado al tenor de lo siguiente:

ESCANEADO

ACTOS RECLAMADOS.

08 MAR 2019

ÚNICAMENTE ES CIERTO que el C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, promulgó el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, con el que se adicionó un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal.

Respecto del acto que se acepta se hacen las siguientes consideraciones:

- El 21 de abril de 2016, el C. Presidente de la República en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitió a la Cámara de Senadores la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal (sic).

¹ Jurisprudencia XX.2o. J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 2470, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" (sic).

otro con firma autógrafa
sin copia/ con anexo

Handwritten signature



- Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidad de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

- El 15 de junio de 2016, al recibir la Iniciativa, las Comisiones Dictaminadoras antes señaladas, entraron en estudio y emitieron Dictamen conforme a sus facultades, en el cual señalaron durante la discusión, lo siguiente:

"Bajo el mismo criterio estas Comisiones Unidas, a fin de brindar seguridad y certeza jurídica en la aplicación de tan importante reforma, consideran necesario adicionar un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal, que determine que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos, en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita la Secretaría de Salud; con lo que se armoniza el citado Código Penal Federal con la Ley General de Salud..." (Sic)

(Información consultable en la página electrónica:
http://silgobernacion.gob.mx/Documentos/2016/12asun_3463041_20161213_14811657971.pdf páginas de referencia 73 y 74)

Conforme a lo antes señalado, las Comisiones Unidad de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda sometieron a consideración de la Cámara de senadores el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, es decir, la Iniciativa cambio de denominación.

- El 13 de diciembre de 2016, la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen de primera lectura/Declaratoria de publicidad en el cual concluyó enviar a la Cámara de Diputados, el expediente que contenía el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, por lo que remitió la Minuta correspondiente.

- El 14 de diciembre de 2016, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal fue recibida en la Cámara de Diputados, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Salud para dictamen.

- El 27 de abril de 2017, mediante Dictamen de primera lectura/Declaratoria de publicidad, las comisiones antes señaladas aprobaron en sus términos la Minuta, para efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la sometieron a la consideración del Pleno.

- El 28 de abril de 2017, la Cámara de Diputados, en su carácter de Cámara revisora, aprobó el Dictamen a discusión, por lo que ordenó Turnar al Ejecutivo Federal para sus efectos Constitucionales.

Se hace notar que, de la revisión al Dictamen, el Artículo Segundo dispone que se adiciona un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 198.-

La siembra, cultivo o cosecha de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal".

Asimismo, el Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos Decreta que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, como puede revisarse en la publicación del Diario Oficial de la Federación de la fecha en cita, el cual fue suscrito en la Ciudad de México, el 28 de abril de 2017, por los Senadores Pablo Escudero Morales y Lorena Cuéllar Cisneros, como Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Cámara de Senadores y por los Diputados



María Guadalupe Murguía Gutiérrez y Raúl Domínguez Rex, como Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Cámara de Diputados, situación que deja de manifiesto la intervención de las Cámaras en el proceso legislativo de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- El 16 de junio de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, el Presidente de la República expidió el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, el cual contiene la materia del Juicio de Amparo que nos ocupa.
- Finalmente, el 19 de junio de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de mérito. Lo anterior se evidencia de acuerdo a los datos recabados por la Dirección Consultiva de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud contenidos en el Memorandum OAG-DCS-MEMO-18-2019 de 25 de febrero de 2019, cuyo original adjunto al presente para pronta referencia.

LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE SE ADMITE.

La autoridad señalada como responsable, C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, no viola los derechos fundamentales a que alude la parte quejosa en su demanda de amparo, toda vez que la promulgación DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, **con el que se adicionó un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal**, se llevó a cabo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dicho acto está ubicado en el marco constitucional y en consecuencia se deberá sobreseer, o en su caso, negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Por lo anterior, suponiendo sin conceder, que se llegará a otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, se hace notar a su Señoría que los efectos de la sentencia protectora no alcanzarían a vincular a la autoridad que represento, por cuanto hace a la promulgación que realizó, en consecuencia, no lo obligaría a dejar insubsistente sus actos, pues la sentencia de amparo no afectaría la vigencia de las normas cuestionadas, ni las privaría de eficacia general.

Sirve de apoyo, la tesis número P. CXXXVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 200006 del IUS y en la página 135, Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general."

Asimismo, cobra aplicación la tesis número 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 197512 del IUS y en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra indica:

"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos



particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo."

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.

Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se comunica a su Señoría que en relación con los actos reclamados, procede el sobreseimiento de acuerdo a lo siguiente:

Primero. Respecto del acto que se ha aceptado, consistente en la promulgación del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, se destaca a su Señoría que procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones VI y VIII, aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal.

Lo anterior toda vez que, del análisis integral de la ampliación de demanda de amparo, se advierte que son inoperantes las manifestaciones de la parte quejosa en contra de la promulgación del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, algún vicio de inconstitucionalidad, en contra de la adición del último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal, esto es, omite formular conceptos de violación en contra de tal acto.

En efecto, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio constitucional deviene improcedente cuando en la demanda no se señalan los dispositivos constitucionales que contengan los derechos fundamentales que los peticionarios de tutela constitucional estima se violan en su contra, así como los razonamientos lógico-jurídicos del por qué, según la parte quejosa, se violan dichos derechos (conceptos de violación).

En ese orden de ideas, si bien la parte quejosa refiere como acto reclamado la promulgación del Código Penal Federal en su artículo 198, último párrafo.

Concluyendo entonces se puede decir que si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de la promulgación de las disposiciones legales, señalando como autoridad responsable a aquella que ordenó su publicación, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta vulnera algún precepto constitucional, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia que aquí se hace valer; debiéndose declarar el sobreseimiento en el juicio de amparo en lo que a tal acto y autoridad se refiere.

Sirve de apoyo la tesis emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 238238 del IUS y en la página 63, del Volumen 91-96, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica:

"CONCEPTOS DE VIOLACION. NO EXPRESADOS, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. *Que el particular quejoso no exprese en la demanda ningún concepto de violación enderezado a impugnar el procedimiento que reclama, es causa de improcedencia al no ser posible, jurídicamente, hacer el examen de la constitucionalidad de dicho acto en caso de que el promovente sea un particular, en que el asunto es de estricto derecho; por ello se debe sobreseer el juicio y no pronunciar sentencia negando el amparo."*

Del mismo modo resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia número 3a./J. 28/93, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 206659 del IUS y en la página 38, del número 72, diciembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que indica:

"CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. *Si se omite en la demanda de amparo expresar los*



conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo."

Segundo. Se destaca a su Señoría que procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 73, párrafo primero, ambos del ordenamiento legal citado con anterioridad y artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior en atención a las consideraciones que a continuación se expresan.

Del análisis conjunto de tales preceptos, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando dicha situación resulte de alguna disposición contenida en la Constitución o en la propia Ley de Amparo, por lo que el juicio de amparo donde se actualice tal circunstancia deberá sobreseerse. Asimismo, se deduce que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales.

En ese sentido es inconcuso que resulta improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional a la parte quejosa, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada.

Por lo anterior, es que si en el presente juicio de amparo se reclama del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, bajo el argumento toral de que dicha normativa constituye la política prohibicionista e inconstitucional del Estado Mexicano para producir productos de cannabis sativa L, es que se revela y colige que la pretensión de la parte quejosa derivaría en que se subsane dicho bloque normativo impugnado, a efecto de que al otorgarse el amparo dicha normativa sea modificada; de ahí que en consecuencia el presente juicio de amparo sea improcedente.

En efecto, la parte quejosa pretende que se le otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que en la Ley General de Salud, sea permisible la autorización para el productos de "cannabis sativa L" y el psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana", así como para ejercer los derechos de la misma, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y en general todo acto relacionado con su producción.

Por lo que se considera que el efecto en sí sería desvirtuar la voluntad del legislador cuando expidió la Ley General de Salud, cuyo objetivo fue reglamentar el derecho a la protección de la salud.² Al respecto, entre las finalidades previstas en la propia ley se señaló "la promoción del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades" (fracción I del artículo 2o). De esta manera, con el objeto de alcanzar dicho nivel de bienestar, el legislador consideró necesario implementar un adecuado "control sanitario" de los psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública en tanto genera dependencia para el consumidor.³

Ahora bien, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; de ahí que resulte improcedente los efectos para los cuales la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

En efecto, el principio de relatividad impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa violación, es decir, no se le puede obligar a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación o modificación de una ley, que constituye una regla de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al peticionario de amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados

² Esta ley sustituyó al antiguo Código Sanitario y se promulgó el 7 de febrero de 1984. Desde esa fecha no se han reformado los artículos 235 y 237, los cuales fueron impugnados por los quejosos.

³ Así se advierte de la exposición de motivos de dicha ley, y sus correspondientes dictámenes legislativos. Al respecto, véase: Exposición de Motivos, Cámara de Origen: Cámara de Diputados, México, Distrito Federal a 15 de Noviembre de 1983 de la Iniciativa de la Ley General de Salud.



y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada o modificada, **lo que resultaría apartado del principio de relatividad enunciado.**

En el caso en particular, de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, traería como efecto que se ordenara a la responsable reparar la omisión de la Ley impugnada por este medio, mediante la inclusión de una disposición menos rígida. Con lo anterior, **se le daría efectos generales a la ejecutoria**, ya que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la Ley General de Salud, lo que pugnaría con el principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis número P. CLXVIII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 197222 del IUS y en la página 180, del Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:

"LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado."

Tercero. Respecto de la inconstitucionalidad del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, es improcedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, **en virtud de que el otorgamiento implicaría múltiples violaciones a los derechos de la sociedad general, así como a diversos ordenamientos legales.** Lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, 1, 4, 15, 76, fracción I, 89, fracción X, 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que **su concesión sería nugatoria para el quejoso ante la inexistencia de una plataforma política integral para autorizar el uso de cannabis sativa L**, tal y como a continuación se expone.

De los anteriores ordenamientos legales se advierte lo siguiente:

- Que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
- Que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
- Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
- Que es facultad exclusiva del Senado, entre otras, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
- Que es facultad y obligación del Presidente de la República, entre otros, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
- Que en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:



- Autodeterminación de los pueblos.
 - No intervención.
 - Solución pacífica de controversias.
 - Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
 - Igualdad jurídica de los Estados.
 - Cooperación internacional para el desarrollo.
 - Respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
 - Lucha por la paz y la seguridad internacionales.
- Que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
 - Que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Asimismo que en la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente, se dejó claro que un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios, en el cual se estableció:

(...)

En ese sentido, el juicio de amparo tiene por objeto específico hacer real y eficaz la autolimitación del ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado.

Un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios tales como la libertad, igualdad y pluralidad, que estén reconocidos en una Constitución o Norma Fundamental, los cuales deben ser garantizados y protegidos ante su desconocimiento a través de los instrumentos jurisdiccionales que la propia Constitución prevea.

(...)

Es en ese sentido de que mediante el juicio de amparo se protegerán de manera directa, además de garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

(...)

Asimismo, que actualmente la política pública en relación con los efectos por consumo de cannabis sativa se encuentra prohibida e incluso tipificado como delito su adquisición, comercialización u obtención por cualquier vía por los efectos que genera el Tetrahidrocannabinol (THC). Lo anterior, es así ya que tanto en la Ley General de Salud, como en el Código Penal Federal, prevalecen otras infracciones administrativas y penales que necesariamente tendrían que cometerse para que en el caso que nos ocupa, el amparo pueda surtir efectos, pues no existe hoy día una autorización para poseer drogas como la cannabis en cantidades mínimas y necesarias para el consumo personal e inmediato, sólo puede concluirse que implícitamente se tolera o permite la adquisición ilícita del producto a consumir (artículos 192, 477, 478 y 479, todos de la Ley General de Salud).

En este entendido, resulta evidente que en el sistema penal vigente, la posesión de marihuana, aún en cantidades mínimas (hasta 5 gr.), sigue constituyendo una conducta típica de delito, y que si bien, de acreditarse que el poseedor es farmacodependiente o consumidor, el Ministerio Público no ejercerá acción penal, ello sólo implica la existencia de una excluyente de responsabilidad que debe probarse, pero de ninguna forma una autorización para consumir marihuana o para adquirir la misma o su semilla.

Asimismo, dicha droga es regulada, entre otros ordenamientos legales, en los siguientes:

- Títulos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Ley General de Salud, relativos a autorizaciones y vigilancia sanitaria.
- Código Penal Federal, en sus artículos 84, fracción III, inciso c), y 90, fracción II, inciso d), 194, 195, y 195 bis, fracción II.
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 2, fracción I, y otros.
- Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.
- Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
- Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
- "NOM-028-SSA2-2009. Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones".



En consecuencia, una concesión del amparo, acorde a lo estrictamente solicitado por el quejoso, en nada le beneficiaría, pues podría implicar la comisión de uno o más delitos, o cuando menos, la continuación de los efectos de delitos ya cometidos, así como violación a diversos ordenamientos legales administrativos, e incluso internacionales. Ello, porque aunque se autorice la siembra o cosecha de marihuana, la obtención de una semilla, que resulta indispensable para dichos procesos, sigue constituyendo un ilícito.

En suma, no es material y jurídicamente viable cumplir una ejecutoria de amparo, si el presupuesto necesario para garantizar la producción de cannabis sativa, conlleva la comisión de un delito por parte de quienes vendan, suministren o entreguen por cualquier medio dicha droga o su semilla a quien la consumirá; la posible comisión de delitos por parte del propio accionante de amparo al recibir la droga o la semilla necesaria para su siembra y cosecha, e incluso, la eventual comisión de ilícitos diversos por parte de la autoridad que deba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Ante las circunstancias expuestas, no es permisible conceder el amparo al quejoso, ya que se insiste, el presupuesto necesario para que pudiera, en su caso, realizar los procesos para los que se solicita el amparo, derivados de la propia demanda, consistentes expresamente en sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana, **implicarían necesariamente la comisión previa de uno o más de los delitos previstos en normas punitivas no impugnadas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal**, esto es así ya que a la fecha no se encuentra regulada la forma lícita para adquirir, importar, ni acceder a la cannabis sativa o a su semilla, y al no existir una regulación específica para uso, al permitir esta conducta, **no se garantiza la protección de terceros, incluida el núcleo esencial de la sociedad mexicana, la familia.**

A mayor abundamiento, sólo podría sembrarse, cultivarse y cosecharse marihuana, si existe como presupuesto la obtención de una semilla de dicha planta, a la vez que sólo podría prepararse, poseerse o transportarse la misma, si existe como presupuesto la adquisición o importación de dicha planta, conductas que finalmente, siguen constituyendo ilícitos penales previstos en normas que no fueron impugnadas ni por tanto, materia de análisis en el presente juicio.

De ahí que, si para sembrar o realizar cualquiera de las conductas planteadas por el solicitante del amparo, debe previamente cometerse un delito por el quejoso o por quienes le provean la marihuana o su semilla, e incluso infringir tratados internacionales, resulta inconcuso que existe un impedimento grave para la emisión de un **pronunciamiento** de orden constitucional. El artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el presente asunto en caso de concederse el amparo a los quejosos, no quedan exentos de la comisión de un delito quienes les provean de la droga, ni el propio quejoso.

A la vez, un principio del juicio de amparo, es que no puede archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, lo que así se ordena en la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. En esos términos, sólo puede concederse la protección de la justicia federal a partir del juicio de amparo, mediante una sentencia que sea de posible cumplimiento, por lo que si la ejecutoria de amparo se dictara en el extremo de ordenar algo que conllevará la comisión de un delito o la continuación de sus efectos, ello destruiría de origen la posibilidad de conocer de un juicio con dichas implicaciones.

Es decir, si una persona solicita autorización para sembrar, cosechar, poseer, transportar y cannabis sativa, es de suponerse que ya cuenta con la misma o que eventualmente accederá a la misma para poder realizar dichos actos; pero si a la fecha, no existe vía lícita de adquisición de la marihuana o de su semilla, luego entonces, resulta jurídicamente imposible restituirlo en el goce del derecho a realizar diversas actividades comerciales e industriales cuando no se garantice que el Tetrahidocannabinol (THC) sea de una concentración menor al 1%, pues superior a esta genera efectos psicotrópicos.

El artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XXIII, señala que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia ley citada, por lo que si el propio artículo 214 de la propia ley, señala que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución, en el caso, nos encontramos ante un supuesto que actualiza dicha improcedencia.

Así, si en el caso, la materia para la ejecución de la sentencia dictada, es que se ordene el otorgamiento de una autorización para diversos actos relativos a producir cannabis sativa, a la que hoy, sólo puede accederse ilícitamente, luego entonces, **es de concluir que la parte quejosa no podrá ejercer el derecho que solicita, o al menos, no dentro de la ley, pues sigue penalizada la adquisición de marihuana**, así como todas las posibles vías para que acceda al narcótico o a su semilla.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que dicha imposibilidad también deriva del contenido del artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece como facultad del C. Presidente de la



República celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en el caso en particular, nuestra país ha signado diversos convenios en materia de drogas, en los cuales se incluye la marihuana, de tal manera que, constitucionalmente, sólo el Presidente de la República es el único facultado para suspender o modificar dichos convenios.

México es parte del "Sistema Internacional de Control de Drogas" (SICD), que se encuentra respaldado por tres tratados internacionales, a saber:

- La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961;
- La Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; y
- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Respecto la Convención Única sobre Estupefacientes, enmendada por el protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única, vale mencionar que ha influido en las leyes sobre prohibición de drogas en todo el planeta. Actualmente, cerca de 153 países han ratificado este instrumento y lo han incorporado a su derecho nacional. Las finalidades de la Convención Única son: "(...) *limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos (...)*" (sic.). Este tratado dispone de un marco conceptual de sustancias sujetas a control, entre las que se encuentran el **cannabis**, la hoja de coca, el opio, etcétera.

La Convención Única contempla a dos organismos internacionales especializados de llevar a cabo el control de las sustancias: La Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico Social y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Entre las funciones de la primera, destacan la modificación de las listas de estupefacientes y la emisión de recomendaciones; en contraste, las funciones de la segunda versan con la comprobación de obligaciones para limitar el cultivo, la producción, la fabricación y el uso de estupefacientes para fines médicos y científicos. **En caso de incumplimiento, la Junta Internacional de Fiscalización puede ejercer sus facultades para solicitar explicaciones a un gobierno** cuando considere que la convención corre un grave peligro porque un país o territorio no ha cumplido con el tratado.

En segundo lugar, tenemos la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Este tratado incluyó nuevas sustancias en un listado de cuatro tablas y su propósito es limitar a fines médicos y científicos, la fabricación, exportación, importación, distribución, existencias, comercio, así como el uso y posesión de las sustancias de psicotrópicas.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, misma que ya contempla una obligación para los Estados que sean parte de dicho tratado de: "(...) *adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal (...)*" (sic.).

Bajo tal contexto, resulta improcedente el presente juicio de amparo que tiene por objeto declarar por una parte como inconstitucionales varios de los artículos de la Ley General de Salud, que apuntalan la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de emitir autorizaciones para la realización de una serie de conductas relacionadas con el consumo personal de marihuana con fines recreativos. De ahí que sus efectos rebasen los fines médicos y científicos a los que alude el SICD, particularmente la Convención Única de 1961 y la Convención de Estupefacientes de 1988. Por lo tanto, es de advertir que, **de concederse el amparo al quejoso, dicha acción genera el incumplimiento de obligaciones internacionales que ha suscrito el Estado mexicano.**

Cuarto. En relación con el Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, considerando que la hoy quejosa carece de interés jurídico o legítimo, de conformidad con en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

Lo anterior, ya que si bien la parte quejosa manifiesta que se ve afectado por la actuación de la autoridad ejecutora que señala como responsable, pues a su decir se le veda su derecho dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, al negarle la autorización para el diversos actos de producción de cannabis sativa con fines productivos, lo cierto es que de la lectura de la demanda a decir del quejoso el oficio número 183300EL040837, de fecha 17 de diciembre de 2018, emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, **los referidos artículos son declarativos en cuanto citan la imposibilidad para otorgar la autorización solicitada.**



En efecto, del contenido del oficio impugnado se deduce que la autoridad señalada como responsable, informó que "... se observa que al no haber permisión expresa en la Ley General de Salud, pero si limitación en el Código Penal Federal, el cultivo será permisible únicamente para fines médicos y científicos, toda vez que la legislación vigente no prevé la posibilidad de llevar a cabo algunas de las actividades solicitadas en su escrito de petición y que se enumeran en los incisos a, b, c y d del presente oficio. En ese sentido se niega la autorización solicitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades mencionadas." (Sic), sin que lo anterior implique una aplicación en perjuicio del impetrante de amparo de los preceptos legales tildados de inconstitucionales por los motivos que expone o que haya sido consecuencia de que se trata de sustancias prohibidas.

Lo anterior es así, pues el mismo oficio número 183300EL040837, de fecha 17 de diciembre de 2018, emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se informa al hoy quejoso lo siguiente: "**No omito manifestarle que si su interés es fabricar o comercializar productos con CBD, es posible tramitar ante esta Autoridad la evaluación sanitaria a través de la cual se puede lograr la importación de materias primas con CBD, siempre que las mismas contengan menos de 1% de THC**" (Sic)

Por lo tanto, los artículos impugnados, necesitan de un acto concreto de aplicación para causar perjuicio a la parte quejosa, cuestión que no acontece en el presente asunto, porque no es suficiente que en el contenido del oficio reclamado se citen los preceptos impugnados para estimar su aplicación sino que es necesario que su contenido sea el sustento del acto desplegado por la autoridad, cuestión que no se da en el caso, porque la comunicación citada no tiene como base la existencia de la prohibición expresa contenida en los artículos citados.

De lo anterior es evidente que a decir del quejoso el oficio número 183300EL040837, de fecha 17 de diciembre de 2018, emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, no se aplicaron los artículos que tilda de inconstitucionales, por ende, es inconcuso que del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso.

En efecto, al controvertirse la constitucionalidad de ciertas normas es indispensable que el juzgador analice el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica y legítima del quejoso, para así poder determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en los dispositivos impugnados, lo que en su caso le permitirá concluir que éste sí afecta su interés legítimo y, por tanto, resulta procedente su impugnación.

Por tanto, al no acreditarse la existencia de un acto de aplicación de los multicitados artículos que tilda de inconstitucionales, es inconcuso que la normatividad impugnada de manera directa alguna afecte de forma actual e inminente la esfera jurídica del peticionario de amparo, por lo que no es procedente analizar su constitucionalidad, al reunir las características de una norma heteroaplicativa.

Lo así razonado encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 159929, página 812, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, de rubro siguiente: "**LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.**"

Quinto. Respecto del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo reclamados, se destaca a su Señoría que procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 107, fracción I, todos del ordenamiento legal citado con anterioridad. En efecto, tales disposiciones normativas establecen lo siguiente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)



XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

(...)

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

(...)

(El énfasis es propio)

De la transcripción anterior se obtiene que el legislador hizo la distinción para la improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico de la parte quejosa, entre aquellas normas generales que causan perjuicio por su sola entrada en vigor y aquellas que para que entrañen una afectación en la esfera de derechos del gobernado, requieran irreductiblemente de un acto posterior de aplicación.

Además, los artículos transcritos evidencian dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, a saber: que la disposición relativa se reclama a partir de su entrada en vigor; o bien que se reclame con motivo del primer acto de aplicación, siempre y cuando en ambos casos se irrogue perjuicio al quejoso.

En el primer supuesto, cuando se reclama la disposición normativa por su sola entrada en vigor, esto es, en su carácter de autoaplicativa, para acreditar el interés que permita reclamar tal acto, el quejoso debe demostrar que se ubica en la hipótesis de la norma reclamada, es decir, que obligue a hacer o dejar de hacer una determinada conducta, lo cual le irrogaría un perjuicio, sin que sea necesario un acto de aplicación por parte de la autoridad.

Para precisar la manera en que se han de distinguir las disposiciones que por su sola vigencia causan perjuicio (autoaplicativas), así como aquellas que para actualizar el perjuicio requieren de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativas), es conveniente transcribir el contenido de la tesis de Jurisprudencia número P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 198200 del IUS y en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: **"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."**

Conforme al criterio jurisprudencial indicado, para distinguir cuándo se está en presencia de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada, que atiende a la manera en que se producen los efectos de la disposición impugnada, ya sea que éstos se actualicen de manera inmediata, o bien que para hacerlo se requiera de algún acto o evento (condición) que origine la actualización de la norma. Por lo que se concluye, que cuando se reclama la ley por considerarla como autoaplicativa es necesario demostrar que los efectos de la disposición impugnada irrogan una afectación en la esfera de derechos del gobernado que se actualiza de manera inmediata a partir de su entrada en vigor. Consecuentemente, si la norma en cuestión prevé alguna carga u obligación para el particular, pero el nacimiento de esa carga u obligación depende de alguna condición prevista en la ley, es claro que se está en presencia de una norma heteroaplicativa.

En el caso, la parte quejosa reclama del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, **como autoaplicativo**, pues considera que dicho precepto legal afecta su esfera de derechos para el realizar diversos actos de producción con cannabis sativa. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que dichas disposiciones legales tildadas de inconstitucionalidad, **no vinculan al accionante de garantías a su cumplimiento ya que no crea, transforma o extingue la situación concreta de derecho de la quejosa**, aunado de que requieren de la actualización de una condición, por lo que es permisible afirmar que el acto admitido por mi representada, tiene el carácter de heteroaplicativo, sin que a la fecha exista un acto concreto de aplicación.

Esto es así ya que para determinar la aplicación de lo dispuesto por los preceptos normativos en cita, resulta indispensable que la parte quejosa acreditara haber realizado una solicitud relacionada con los actos que implican los preceptos legales reclamados y derivado de ello se le hubieran negado, lo cual no se acredita ni indiciariamente en el presente caso. Sin embargo en el caso en particular, la quejosa no acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo, **debido a**



que deja de demostrar de manera fehaciente haber solicitado una autorización para los actos que pretende y para los que involucran los preceptos legales reformados y adicionados que reclama, ante alguna autoridad gubernamental administrativa o sanitaria, sin que sea óbice citar que el oficio que señala como acto de aplicación fue emitido posterior a la reforma citada de la Ley General de Salud.

Por lo que se concluye que con la promulgación reclamada, no se afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, debiéndose sobreseer o en su caso negar el la concesión del amparo, **máxime si no se encuentra plenamente probado el acto de aplicación de la norma.** Corroborar lo manifestado en las líneas que anteceden, la tesis número II.3o.C.3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el registro 191475 del IUS y en la página 1205, del tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: **"LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN."**

CONSTANCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO.

Se destaca a su Señoría que en relación con el acto que se acepta, consistente en la promulgación del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, **con el que se adicionó un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal**, el C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos carece de constancias que remitir a ese H. Juzgado, puesto que dicha Ley y la reforma a la misma, se encuentran debidamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en ese orden de ideas, al constituir derecho vigente, no es objeto de prueba.

Por lo antes expuesto y fundado, a usted C. Juez, atentamente pido:

Primero. Tener por rendido en tiempo y forma la ampliación de informe justificado solicitado al C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. En su oportunidad decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones vertidas en éste informe y en su caso, negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Atentamente.
La Directora Contenciosa


Lic. Ana-Lucía Tlahuech Rivera